

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	MARÍA OLIVA RUÍZ BETANCUR
DEMANDADO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-018-2019-00188-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Pensión de vejez, régimen de transición y semanas en mora.
DECISIÓN	Revoca y absuelve

Medellín, doce (12) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Estudiado, discutido, y aprobado en Sala virtual.

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede la Sala a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **MARÍA OLIVA RUÍZ BETANCUR** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**.

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 036**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ANTECEDENTES

Es materia de la Litis, resolver el recurso de apelación y el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES, contra la sentencia que profirió el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín - Antioquia, en la audiencia pública celebrada el día 23 de marzo de 2022, dentro del proceso referenciado.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que la señora MARÍA OLIVA RUÍZ BETANCUR nació el 8 de diciembre de 1946, y durante su vida laboral prestó sus servicios a varios empleadores del sector privado, a través de los cuales se afilió al régimen de prima media con prestación definida a partir del 11 de octubre de 1985, y por contar con más de 35 años de edad al 1º de abril de 1994, se hizo beneficiaria del régimen de transición pensional previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993.

Relata el escrito introductorio que la historia laboral de la demandante presenta diversas INCONSISTENCIAS, DEUDAS POR NO PAGO o CESACIÓN DE COTIZACIÓN por los periodos comprendidos entre el 1º de febrero de 1986 y hasta el 31 de mayo de 1989 y desde el 1º de mayo de 1990 y hasta el 14 de mayo de 1991; con los empleadores “SOCORRO SALDARRIAGA MORA” y “CONFECCIONES KORLENS”, para un total de 1.595 días en mora equivalentes a 227,85 semanas.

Que de tenerse en cuenta las anteriores semanas, y las registradas en la historia laboral (321.61) la señora RUIZ BETANCUR logra reunir un gran total de 549,46 semanas dentro de los 20 años anteriores a la fecha de cumplimiento de la edad pensional (55 años – mujeres), logrando causar una pensión de vejez bajo los presupuestos del art. 12 de Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, y en tal sentido se agotó la reclamación administrativa el día 13 de febrero de 2019.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que SE DECLARE que la demandante MARÍA OLIVA RUÍZ BETANCUR reúne la densidad de cotizaciones para causar una pensión de vejez bajo los presupuestos del art. 12 de Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, por ser beneficiaria del régimen de transición pensional previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993, en consecuencia, SE CONDENE a COLPENSIONES al reconocimiento y pago de esta prestación económica en forma retroactiva desde el cumplimiento de los requisitos legales, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1933, las costas procesales, y lo que ultra y extra petita resulte acreditado en la Litis.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

COLPENSIONES (fls. 40 y ss del archivo PDF N° 01): a través de su apoderada judicial manifestó frente a los supuestos fácticos narrados por la activa, que son ciertos aquellos que aluden a la edad de la demandante, su afiliación al régimen de prima media con prestación definida y la solicitud pensional por ella presentada, sin que le consten los restantes supuestos fácticos, los cuales deberán ser objeto de debate probatorio en la litis; se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas, proponiendo en su defensa las excepciones de mérito que denominó: *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN; AUSENCIA DE CAUSA PARA PEDIR; PRESCRIPCIÓN; COMPENSACIÓN INDEXADA; BUENA FE DE COLPENSIONES; e IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS”*.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En el fallo objeto de apelación y consulta, la juez A Quo en audiencia pública de juzgamiento celebrada el 23 de marzo de 2022, DECLARÓ que la señora MARIA OLIVA RUIZ BETANCUR es beneficiaria del régimen de transición que consagra el artículo 36 de la ley 100 de 1993, y en consecuencia le son aplicables las disposiciones del decreto 758 de 1990, presupuesto

normativo bajo el que acredita los requisitos necesarios para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez.

DECLARÓ que la prestación pensional antes descrita se causó desde el 08 de diciembre de 2001, pero solo comenzará a disfrutarse desde el 13 de febrero de 2016 en consideración al fenómeno prescriptivo, conformándose por 14 mesadas al año, y por una suma equivalente al salario mínimo legal mensual vigente.

CONDENÓ a COLPENSIONES a reconocer y pagar a la actora la suma de \$68.554.776, a título de retroactivo pensional por el periodo comprendido entre el 13 de febrero de 2016 y el 28 de febrero de 2022 incluidas las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada anualidad, disponiéndose que a partir del 1° de marzo de 2022, Colpensiones continúe reconociendo y pagando una mesada pensional en cuantía mínima.

De otro lado, se AUTORIZÓ a COLPENSIONES a descontar del retroactivo pensional reconocido, la suma de \$3.244.354 por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, así como el valor de las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud causadas.

DECLARÓ probada en la excepción de COMPENSACIÓN, y parcialmente probada la de PRESCRIPCIÓN propuestas por COLPENSIONES.

También CONDENÓ a COLPENSIONES a reconocer, liquidar y pagar a favor de la señora MARIA OLIVA RUIZ BETANCUR los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 causados desde el 19 de junio de 2019, y hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de la obligación.

Finalmente impuso las COSTAS del proceso en la primera instancia a cargo de COLPENSIONES y a favor de la demandante fijando como agencias en derecho la suma de \$3.427.739 equivalente al 5% de la condena.

Como fundamento de su decisión, estimó la juez de primer grado que la actora es beneficiaria del régimen de transición previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993, por contar con 47 años de edad al 1° de abril de 1994, beneficio

que le permite acceder a una pensión de vejez bajo las condiciones de edad, semanas cotizadas y monto pensional, menos gravosos consagrados en la legislación anterior, que en su caso particular sería el acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 del mismo año.

Señaló que una vez verificada la historia laboral de la actora, se observa la existencia de 227 semanas en mora a través de los empleadores “CONFECCIONES KORLENS” y “SOCORRO SALDARRIAGA MORA” mismas que debían validarse como semanas efectivamente cotizadas, dejando en claro que la omisión de cobro coactivo de las administradoras de pensiones no puede imputarse al trabajador afiliado, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL5689 de 2021.

Que la actora sí estuvo afiliada al sistema de seguridad social en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1985, con la empleadora “SOCORRO SALDARRIAGA MORA”, y entre los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril de 1990 con el empleador “CONFECCIONES KORLENS”

Y los periodos de febrero a diciembre de 1986, enero a diciembre de 1987, enero a diciembre de 1988, y enero a mayo de 1989, la accionante estaba válidamente afiliada al ISS a través del empleador “SOCORRO SALDARRIAGA MORA”, y que tal afiliación se mantuvo en los ciclos de mayo a diciembre de 1990, y enero a mayo de 1991 con el empleador CONFECCIONES KORLENS”

Expuso que del expediente administrativo aportado por COLPENSIONES, se logra constatar que la demandante si canceló el porcentaje en forma correcta el porcentaje del aporte subsidiado en pensiones, desde el mes de marzo de 1998 al 27 de noviembre de 1998 equivalentes a 38,57 semanas, las cuales deben tenerse en cuenta para efectos pensionales.

Que la actora tiene en su haber más de 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad pensional, logrando así causar una pensión de vejez bajo los presupuestos del art. 12 del Decreto 758 de 1990, y

que al haber cumplidos los requisitos de edad y semanas el día 8 de diciembre de 2001, no necesitaba acreditar la densidad de cotizaciones del acto legislativo 01 de 2005, y que si bien la última cotización se efectuó en diciembre de 2011, el disfrute de la pensión, se encuentra afectado por el fenómeno prescriptivo, pues este operó en relación a las mesadas causadas con anterioridad al 13 de febrero de 2016

En relación con los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, manifestó que estos eran procedentes, al no existir causal objetiva que justifique el retardo en el reconocimiento pensional, pues era un deber de esta entidad efectuar el cobro coactivo de los aportes.

VI. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

La apoderada judicial de COLPENSIONES solicita la revocatoria de la sentencia de primera instancia, pues para constatarse la existencia de periodos en mora que deban ser computados para efectos pensionales, era necesario la vinculación por pasiva de los supuestos empleadores morosos, la relación laboral debía demostrarse, no podía presumirse como equivocadamente lo asumió la juez de primer grado.

Adujo la recurrente que en el sub lite no era posible llenar vacíos en la historia laboral de la demandante de manera retroactiva, pues esto conllevaría a un desfinanciamiento del sistema general de pensiones, abriéndose la puerta para que cualquier persona alegue la existencia de mora, para así lograr una pensión de vejez a través de afiliaciones y pagos retroactivos.

Que la demandante se pretende pensionar con 500 semanas, y más de la mitad de esas semanas, presentan inconsistencias que no pueden ser avaladas como periodos efectivamente laborados y/o cotizados.

Finalmente se opone a la condena por intereses moratorios al estimar, que dicha condena resulta improcedente, pues estos están llamados a operar sobre las mesadas de una pensión previamente reconocida por la entidad, y en

el caso que nos ocupa, la pensión fue negada al no haberse demostrado el requisito de semanas cotizadas, decisión que de manera alguna puede tildarse de arbitraria o de mala fe, máxime que los intereses moratorios no son de aplicación automática, tal y como lo tiene adoctrinado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

Alegatos de conclusión.

La apoderada judicial de COLPENSIONES presentó sus alegatos de conclusión ante esta instancia, exponiendo básicamente que, es la propia demandante quien reconoce la existencia de inconsistencias, deudas por no pago o cesación de cotización por múltiples períodos en varios años con empleadores que no han sido vinculados al proceso.

Que el sistema pensional colombiano para poder presumir la buena fe, tiene que partir de la verdadera y real existencia de una afiliación y pagos efectuados en los años correspondientes y no pretenderse como en este caso de manera totalmente improcedente, que 33 años después se presuman trabajados períodos no cotizados, sin vinculación de los empleadores, sin que se estén discutiendo la relación de trabajo, ni los días realmente trabajados, pretendiendo llenar vacíos de manera retroactiva, lo que desfinancia el sistema y ponen entre dicho la buena fe frente al mismo, ya que no proceden ni afiliaciones ni pagos retroactivos, porque se itera, cualquier persona podría alegar presuntas moras y así llenar los vacíos y faltantes de semanas para alcanzar pensiones de vejez en detrimento del sistema pensional administrado por Colpensiones.

Y finalmente considera improcedente la condena a los intereses moratorios, toda vez que la negativa de la entidad, obedeció a una decisión con respaldo de las normas vigentes que rigen la materia, y con fundamento en ello, tuvo el serio e invencible convencimiento de que la peticionaria no cumplía con los requisitos legales para que le fuera reconocida la prestación económica por no contar con las semanas exigidas por la Ley, por lo que la actuación administrativa queda exenta de cualquier tinte de arbitrariedad o ilegalidad, y en

esa medida, mal pueden achacarse a la Administradora los efectos adversos que son propios de la mora o negligencia en la concesión del derecho.

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión. -Pensión de vejez con aportes en mora, intereses moratorios. Teniendo en cuenta los puntos objeto de apelación que delimitan la competencia de la Sala en la segunda instancia, así como el grado jurisdiccional de consulta que opera a favor de COLPENSIONES, la controversia jurídica que debe resolverse, consiste en determinar si la demandante MARÍA OLIVA RUÍZ BETANCUR reúne o no el requisito de semanas cotizadas para causar el derecho a una pensión de vejez, bajo el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con los arts. 12 y 20 del Acuerdo 049 de 1990, con la inclusión de periodos en mora presuntamente adeudados por los empleadores “CONFECCIONES KORLENS” y “SOCORRO SALDARRIAGA MORA” un tiempo cotizado al subsidiado en cotizaciones, y solo en caso de prosperar dicha pretensión, pasará la sala a determinar el valor de la mesada pensional y del retroactivo adeudado y si este último puede ser objeto de intereses moratorios o en su defecto indexación.

Para resolver lo pertinente valga precisar algunos asuntos que no resultan ser objeto de controversia en el proceso:

- Que la demandante nació el día 8 de diciembre de 1946 según consta en el documento de identidad visible a folios 33 del archivo PDF N° 01, lo que significa que a la fecha en que entró en vigencia el sistema general de pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993, tenía 47 años de edad.

- Que según la historia laboral más actualizada aportada por COLPENSIONES (archivo N° 15), la señora MARÍA OLIVA RUÍZ BETANCUR registra un total de 721,71 semanas cotizadas al sistema general de pensiones, entre el 11 de octubre de 1985 y el 31 de diciembre de 2011, de las cuales **321,6** semanas se encuentran cotizadas entre el 8 de diciembre de 1981 y el 8 de diciembre de 2001, esto es, en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad pensional.
- Que la demandante elevó solicitud de pensión de vejez ante el ISS el día 6 de febrero de 2009, pero esta le fue negada a través de la resolución N° 011390 de 2009, aduciéndose insuficiencia de semanas cotizadas, y luego se efectuó una segunda reclamación pensional ante COLPENSIONES el día 13 de febrero de 2019, según consta a folios 18 y 19 del archivo PDF N° 001.
- Y finalmente está probado en el plenario que COLPENSIONES le otorgó a la actora una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, a través de la resolución N° GNR-059734 del 13 de abril de 2013 (fls.28 al 32 del archivo PDF N° 001), en cuantía única de \$3.244.354 liquidada con base en 718 semanas cotizadas.

Régimen de transición

El régimen de transición pensional que reclama para sí la demandante es una figura jurídica creada por el legislador para proteger los intereses, derechos y beneficios de las personas que estaban próximas a pensionarse a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones creado por la Ley 100 de 1993, buscando mantenerles las condiciones de su régimen inicial sin hacerle el cambio a las nuevas estipulaciones de la ley 100 de 1993.

Así lo dispuso el artículo 36 de la citada Ley quien dirigió el beneficio normativo a los trabajadores, que a la fecha de entrada en vigencia del SGP, que para el sector privado fue el 1° de abril de 1994, cumplieren una de las siguientes condiciones: Mujeres con treinta y cinco (35) o más años de edad; hombres con cuarenta (40) o más años de edad, hombres y mujeres que, independientemente de la edad, acrediten quince (15) años o más de servicios cotizados a esa fecha concreta, conforme lo señala el artículo 151 de la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, se debe tener en cuenta además, la reforma que al artículo 48 de la Constitución Política de 1991, le introdujere el Acto Legislativo 01 de 2005, en su artículo 1° párrafo transitorio número 4°, el cual estableció que dicho régimen, no podría extenderse más allá del 31 de Julio de 2010; excepto para aquellos trabajadores que estando en dicho régimen, tuvieran cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del citado Acto Legislativo, esto es, el 29 de Julio de 2005, a los cuales se les mantendrían dichas ventajas pensionales hasta el año 2014 (31 de Diciembre).

EL CASO EN CONCRETO:

Estando claro lo anterior, y teniendo en cuenta el material probatorio allegado al proceso, se concluye que la señora MARÍA OLIVA RUÍZ BETANCUR, en razón de su edad se convirtió en beneficiaria del régimen de transición pensional previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, circunstancia que le permitía, en principio acceder a una pensión de vejez con los requisitos de edad, semanas cotizadas o tiempo de servicios y monto pensional, más favorables que los contenidos en la normatividad anterior al sistema general de pensiones que le resultare aplicable, que en su caso particular, sería el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, por haber efectuado cotizaciones al ISS a través de varios empleadores privados, normativa según la cual, tendría derecho a causar una pensión de vejez cuando cumpliera 55 o más años de edad (mujeres) y un mínimo de (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de la edad mínima o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.

También está probado que la actora tiene en su haber un total de **721,71** semanas cotizadas a COLPENSIONES entre el 11 de octubre de 1985 y el 31 de diciembre de 2011, fecha en que se produjo su última cotización como trabajadora independiente, de las cuales **321,6** semanas se encontraban cotizadas dentro del lapso de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad

pensional, densidad que le imposibilitaría acceder a una pensión de vejez en aplicación del régimen de transición en concordancia con el art. 12 del acuerdo 049 de 1990, siendo este el motivo para negarle el reconocimiento pensional a través de la resolución ISS N° 011390 de 2009.

De lo visto hasta el momento, podría decirse que la demandante no reúne la densidad mínima de cotizaciones para causar el derecho a una pensión de vejez en los términos del art. 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art. 9° de la Ley 797 de 2003, ni tampoco bajo el régimen de transición previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993.

Sin embargo, la demandante en los hechos cuarto y quinto de la demanda, anuncia la existencia de periodos en mora, inconsistencias, y cesaciones de pago de varios de sus ex empleadores, veamos:

5. MARIA OLIVA RUIZ BETANCUR cuenta con la densidad de **549,46 semanas** cotizadas dentro de los 20 años anteriores a la fecha de cumplimiento de la edad de 55 años, es decir, desde el 8 DE DICIEMBRE DE 1981 – 8 DE DICIEMBRE DE 2001. Lo anterior tiene soporte en lo siguiente:

- a) En la HISTORIA LABORAL refleja la densidad de **321,61 semanas** efectivamente cotizadas dentro de los 20 años anteriores a la fecha de la edad de 55 años.
- b) Más la densidad de **227,85 semanas** que presenta DEUDAS POR NO PAGO o CESACIÓN DE COTIZACIONES en su HISTORIA LABORAL por los periodos 1 DE FEBRERO DE 1986 Y HASTA EL 31 DE MAYO DE 1989 y desde el 1 DE MAYO DE 1990 Y HASTA EL 14 DE MAYO DE 1991; con los empleadores SOCORRO SALDARRIAGA MORA y CONFECCIONES KORLENS, respectivamente.

Para un total de **227,85** semanas con mora patronal, que según afirma deben ser tenidas en cuenta para efectos pensionales, al estar inmersas en ese interregno de los últimos 20 años, esto es, entre el 8 de diciembre de 1981 y el 8 de diciembre de 2001.

La tesis esbozada en la demanda fue acogida por la juez de primer grado, quien además de avalar como semanas en mora, el tiempo aducido por la activa, también encontró otras semanas (38,57 semanas) derivadas de la cotización subsidiada al régimen general de pensiones a través del Consorcio Prosperar.

Para verificar lo anterior, esta Sala procedió a realizar su propio estudio de la prueba documental, incluidas allí las diversas historias laborales de la señora MARÍA OLIVA RUÍZ BETANCUR, encontrando que efectivamente en la historia laboral TIPO CAN elaborada por el extinto INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, la entidad relaciona a los empleadores “SOCORRO SALDARRIAGA MORA” y “CONFECCIONES KORLENS” en un DEBIDO COBRAR, el primero entre el 01-02-1986 al 31-05-1989, y el segundo de estos empleadores entre el 01-05-1990 al 31-12-1994.

En esa misma historia laboral se indicó que la demandante fue afiliada al ISS con el empleador “SOCORRO SALDARRIAGA MORA” el día 11 de octubre de 1985, y fue retirada el día 31 de mayo de 1989, lo que se traduce en un total de 1.326 días equivalentes a 189 semanas.

Y respecto al segundo empleador “CONFECCIONES KORLENS”, se registra un ingreso o afiliación al ISS el día 27 de noviembre de 1989 y un retiro el día 14 de mayo de 1991, lo que se traduce en un total de 533 días equivalentes a 76 semanas.

No obstante, en la historia laboral más actualizada expedida por COLPENSIONES, la actora registra con los referidos empleadores otros extremos temporales y semanas cotizadas, veamos:

RESUMEN DE SEMANAS COTIZADAS POR EMPLEADOR

En el siguiente reporte encontrará el total de semanas cotizadas a través de cada uno de sus empleadores o de sus propias cotizaciones como trabajador independiente, es decir, las que han sido cotizadas desde enero de 1967 a la fecha. Recuerde que la Historia Laboral representa su vida como trabajador, la que usted ha construido mes a mes y año a año.


[1]Identificación Aportante	[2]Nombre o Razón Social	[3]Desde	[4]Hasta	[5]Último Salario	[6]Semanas	[7]Lic	[8]Sim	[9]Total
2012405436	SOCORRO SALDARRIAGA	11/10/1985	31/01/1986	\$17.790	16,14	0,00	0,00	16,14
2019000026	PROTEMPORE	23/06/1988	12/07/1988	\$30.150	2,86	0,00	0,00	2,86
2012405604	TEXTILES FRANCY	13/10/1988	20/01/1989	\$39.310	14,29	0,00	0,00	14,29
2012406787	CONFECCIONES KORLENS	27/11/1989	30/04/1990	\$47.370	22,14	0,00	0,00	22,14
2012403070	INDUSTRIAS EL KLAN	20/02/1992	23/12/1992	\$70.260	44,00	0,00	0,00	44,00
2016121909	FRANCISCO JAVIER CAN	05/03/1993	31/12/1994	\$98.700	95,29	0,00	0,00	95,29

La diferencia entre las semanas efectivamente cotizadas en la historia laboral más actualizada expedida por COLPENSIONES, y las semanas debidas de cotizar, según los extremos temporales relacionados en la historia laboral tipo CAN, llevó a la parte demandante a concluir que el empleador “SOCORRO SALDARRIAGA MORA” adeudada un total de 172.86 semanas, que debían

sumarse a las 53.86 semanas en mora del empleador “CONFECIONES KORLENS”, para un gran total de **227 semanas en mora**.

Sin embargo, esta Sala discrepa de las valoraciones probatorias realizadas tanto por la parte demandante como por la juez de primer grado, pues este incorrecto análisis lo llevó a suponer la existencia de unas relaciones laborales continuas e ininterrumpidas con estos empleadores en los siguientes extremos: del 11-10-1985 al 31-05-1989 (SOCORRO SALDARRIAGA MORA) y del 27-11-1989 al 14-05-1991 (CONFECIONES KORLENS), a sabiendas que durante esos lapsos, la actora también registra afiliaciones y cotizaciones al sistema general de pensiones con otros empleadores como es el caso de “PROTEMPORE” y “TEXTILES FRANCY”.

En efecto, al evidenciarse otros empleadores dentro de esos mismos extremos temporales, era carga de la prueba de la parte demandante demostrar la existencia o no de esas relaciones laborales, y sus verdaderos extremos temporales, pues él no reporte de una novedad de retiro no puede significar necesariamente la continuidad de una relación laboral con un determinado empleador, como equivocadamente lo asumió el juez de primer grado, máxime que dentro del material probatorio allegado por las partes existe disparidad respecto a los extremos temporales, como se aprecia en el expediente administrativo aportado por COLPENSIONES, donde obra un documento proveniente de la vicepresidencia de pensiones del ISS – historia laboral elaborada por el solicitante de prestación económica, según el escrito, y sin firma, donde se relacionan las empresas con las que laboró la demandante, su NIT, fecha de ingreso, fecha de retiro, etc., veamos:

**SEGURO SOCIAL**
Pensiones

I.S.S VICEPRESIDENCIA DE PENSIONES
HISTORIA LABORAL ELABORADA POR EL SOLICITANTE DE
PRESTACIÓN ECONOMICA
SECCIONAL ANTIOQUIA-CAP SUR

NOMBRE María Olivia Ruiz Betancur
C.C N° 21.701.039
N° DE AFILIACIÓN O CARNET DEL I.S.S ANTES DE 1984 921701039

Empresas Donde Laboro	Nit	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Aport o Iss	Otro
<u>Socorro Saldarriaga M.</u>	<u>02012405436</u>	<u>11-10-85-</u>	<u>31-01-86-</u>	<u>X</u>	
<u>Protámpora</u>	<u>02019000026</u>	<u>23-06-88-</u>	<u>12-07-88-</u>	<u>X</u>	
<u>Confeciones Karlens</u>	<u>02012406787</u>	<u>27-11-89-</u>	<u>30-04-90-</u>	<u>X</u>	
<u>Industrias el Klan</u>	<u>02012403070</u>	<u>20-02-92-</u>	<u>23-12-92-</u>	<u>X</u>	
<u>Francisco J. Cano B.</u>	<u>02016121909</u>	<u>05-03-93-</u>	<u>31-12-94-</u>	<u>X</u>	
<u>Textiles Francy</u>	<u>02012405604</u>	<u>13-10-88-</u>	<u>20-01-89-</u>	<u>X</u>	
<u>Francisco J. Cano B.</u>	<u>71634895</u>	<u>01-03-95-</u>	<u>01-12-95-</u>	<u>X</u>	
<u>Paanco Ltda.</u>	<u>800700763</u>	<u>01-07-98-</u>	<u>10-08-98-</u>	<u>X</u>	
<u>Tempotrabajamos Ltda.</u>	<u>811017760</u>	<u>01-02-2003</u>	<u>27-03-2003</u>	<u>X</u>	
<u>Prosperan</u>	<u>99999999999</u>	<u>01-01-99-</u>	<u>2008</u>	<u>X</u>	

Destacando la Sala, que en el referido documento se diligenciaron como fechas de ingreso y retiro las mismas fechas contenidas en la historia laboral más actualizada aportada por COLPENSIONES, es decir, un tiempo de afiliación inferior al aducido por la parte demandante.

En efecto, la mora que se reclama en la presente Litis no se encuentra acreditada, no siendo posible tener la simple omisión de reportar la novedad de retiro al sistema general de pensiones, como un indicador de la continuidad de la relación laboral, pues declarar probado un hecho de esta magnitud y con tantas y definitivas implicaciones, no depende únicamente del reporte de una simple novedad, todo lo contrario, se requieren otros elementos probatorios que permitan evidenciar la existencia de esa relación laboral y su continuidad, para así declarar probado este supuesto fáctico con absoluta certeza, para ello debió valerse la parte demandante de todas las pruebas autorizadas y de las que

pudo disponer o solicitar su práctica, en todo caso, relevantes e idóneas, ya sean documentales como un contrato de trabajo, las colillas del pago de nómina, o la liquidación definitiva de prestaciones sociales, entre otras, o en su defecto, en caso de no existir evidencia de tipo documental, pudo haberse solicitado la práctica de una prueba testimonial, y no haber dejado al azar la demostración de este hecho, como efectivamente ocurrió; lo anterior en atención al postulado de la carga de la prueba al que hace referencia los artículos 164 y 167 del Código General del Proceso, deber probatorio que estaba en cabeza de la parte demandante, quien lo desatendió por completo.

Y es que la demostración de este periodo supuestamente laborado y no cotizado, requería de una mayor actividad probatoria de la parte demandante, pues lo afirmado en este sentido debía contar con un respaldo documental o testimonial que permitiera inferir que la relación laboral con el supuesto empleador moroso perduró más allá de la última semana efectivamente cotizada.

Con base en las consideraciones que anteceden la Sala encuentra que no le asiste derecho a la señora RUÍZ BETANCUR a la pensión de vejez que reclama, por régimen de transición que permite la aplicación del acuerdo 049 de 1990, al no contar con 500 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad pensional o 1.000 semanas de cotización en cualquier tiempo, y menos aún le asiste derecho a una pensión de vejez bajo el actual régimen general de pensiones, donde la exigencia en semanas cotizadas es aun superior.

Así las cosas, habrá de revocarse la sentencia de primera instancia, declarando probada la excepción de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN”, propuesta por la apoderada judicial de COLPENSIONES, a quien se absuelve de la totalidad de pretensiones y cargos formulados en su contra por la señora MARÍA OLIVA RUÍZ BETANCUR.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida las costas procesales en ambas instancias estarán a cargo de la demandante MARÍA OLIVA RUÍZ BETANCUR y a favor de COLPENSIONES, de conformidad con lo dispuesto en el art. 365 del Código General del Proceso, en esta instancia se fijan como agencias en derecho la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$200.000), las de primera instancia deberán ser recalculadas por el juzgado de origen.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia objeto de apelación y consulta de origen y fecha conocidos, y en su lugar, declarar probada la excepción de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN”, propuesta por la apoderada judicial de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, a quien se absuelve de la totalidad de pretensiones y cargos formulados en su contra por la señora MARÍA OLIVA RUÍZ BETANCUR, según lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: COSTAS procesales en ambas instancias a cargo de la parte demandante MARÍA OLIVA RUÍZ BETANCUR y a favor de la parte demandada COLPENSIONES, en esta instancia se fijan como agencias en derecho la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$200.000), las de primera instancia deberán ser recalculadas de por el juzgado de origen.

TERCERO: En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

CUARTO: SE ORDENA la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada